



RESOLUCIÓN Nº 3476/2023 POR LA QUE SE ACUERDA LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL DEL LOTE 1 DEL SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE 4 VPPA Y TRASTEROS EN EL MUNICIPIO DE HORCAJO DE LA SIERRA - AOSLOS; 4 VPPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE LA SIERRA; Y 10 VPPA, EN BERZOSA DE LOZOYA" (A/SER-033033/2019).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Con fecha de 28 de agosto de 2020, se formaliza el lote 1 del contrato de servicio de "Control de calidad de las obras de 4 VPPA y trasteros en el municipio de Horcajo de la Sierra - Aoslos; 4 VPPA en el municipio de Puebla de la Sierra; y 10 VPPA, en Berzosa de Lozoya" (A/SER-033033/2019) con la empresa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U (NIF: A24036691), por un importe de 92.620,53 euros IVA excluido.

Dicho lote afectaba a las siguientes ubicaciones:

- C/ Real nº 55, en el municipio de Horcajo de la Sierra-Aoslos.
- C/ Pradillo nº 38, en el municipio de Puebla de la Sierra.

SEGUNDO. - Para responder del cumplimiento de este contrato, el adjudicatario constituyó garantía definitiva mediante AVAL por importe de 964,50 euros en la Tesorería C. Madrid, según se acredita con resguardo de depósito número 202055002239L de 29 de Julio de 2020.

TERCERO. - Este contrato es complementario de otro principal denominado CONTRATO DE LAS OBRAS DE 4 VPPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE LA SIERRA (A/OBR-021652/2020) adjudicado a la empresa TRAUXIA S.A., con NIF: A84465749 y formalizado el 25 de noviembre de 2020.

CUARTO. - Con fecha 23 de diciembre de 2022 por resolución del Director Gerente con nº 5105/2022, se acuerda la resolución del Contrato de Obras (Expediente número A/OBR-021652/2020), por los motivos expuestos en la misma.

QUINTO. - Con fecha 27 de abril de 2023, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U solicita "*abono de los costes generados por los trabajos realizados señalados. Y en atención a dicha reclamación, se estime y proceda al pago de las cantidades indicadas en el documento adjunto.*"

SEXTO. - Con fecha 3 de julio de 2023, la Subdirección General de Proyectos y Obras emite informe de resolución del contrato de servicios por causas sobrevenidas. En el mismo dice lo siguiente:

"Una vez revisada la valoración de INCOSA, se considera aceptable una liquidación de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE euros con CUATRO céntimos (s/IVA).

En siguiente cuadro se desglosan los conceptos e indemnización con derecho a percibir:



PROPUESTA	INCOSA	AGENCIA VIV. SOCIAL
CONCEPTO	s/IVA	s/IVA
Análisis del Proyecto de Ejecución y Plan de CC		
Elaboración de informe de fecha 08/03/2021	1.367,18 €	1.367,18 €
Elaboración de informe de fecha 16/04/2021		
3% indemnización	381,53	329,86 €
TOTAL	1.748,71 €	1.697,04 €

Existe una discrepancia de 51,67 € IVA excluido con respecto el importe reclamado por el adjudicatario.

SÉPTIMO. - Con fecha 7 de julio de 2023 se dictó la resolución 3026/2023 por la que se acordaba el inicio del procedimiento para la resolución contractual parcial del lote 1 del contrato de servicios de referencia, notificándose la misma con fecha 10 de julio de 2023, acusando recibo el mismo día. En dicha resolución, se abría un plazo de alegaciones por un plazo máximo de diez días naturales a contar desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

OCTAVO. - Transcurrido el plazo concedido al efecto, la empresa no ha presentado alegación alguna durante el mismo.

NOVENO. - Con fecha 18 de agosto de 2023, los Servicios Jurídicos emitieron informe donde concluían los siguiente: *“Examinada la propuesta remitida, y a la vista de la legalidad vigente, se informa favorablemente el expediente de resolución propuesto.”*

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Legislación aplicable

Atendiendo a la fecha de adjudicación del contrato de referencia, se encuentra vigente la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Asimismo, son de aplicación los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones técnicas que rigen dicha contratación, el Proyecto de Obras aprobado, el Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Reglamento general de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril y demás disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa. Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Segundo. - Significado y alcance de la potestad de resolución contractual

La resolución contractual se configura, dentro del ámbito de las denominadas prerrogativas de la Administración, previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público como una facultad exorbitante de la misma:

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que



ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”.

Su ejercicio no se produce de manera automática, sino cuando lo exija el interés público implícito en cada relación contractual, fundándose así en el servicio objetivo a los intereses generales que el artículo 103 de la Constitución proclama de la actuación administrativa.

El ejercicio de esta potestad administrativa de resolución unilateral se encuentra reglado desde el punto de vista formal y material, de tal forma que aquélla sólo puede ser ejercida siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca y cuando concurran las causas definidas en la Ley.

Tercero. - Procedimiento para la resolución contractual

En lo que se refiere al procedimiento propiamente dicho para la interpretación, modificación o resolución correspondiente, resultan aplicables las previsiones contenidas en la 9/2017, de 8 de noviembre y, en particular, de conformidad con lo previsto en su artículo 212.1, 191.1 así como en el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), debiendo ajustarse al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía
- Informe del servicio jurídico.
- Dictamen del Consejo de Estado órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista

Finalmente, la cláusula 41 de Pliego de Cláusulas administrativas particulares que rigen dicha contratación, establece que “La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP”.

Tras producirse el trámite de Audiencia, tal y como queda relatado en el antecedente de hecho séptimo y octavo y al no proponerse la incautación de la garantía, por lo que no sería necesario dar audiencia al avalista, el siguiente trámite consistió en la petición del preceptivo informe a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid puesto que no consta oposición por parte del contratista.

El preceptivo informe se emitió favorablemente el día 18 de agosto de 2023.

Cuarto. - Concurrencia de la causa de resolución.

La LCSP regula con carácter general la resolución de los contratos en su artículo 211. Sin perjuicio de las causas previstas en el citado precepto, en su apartado h) se remite a las establecidas expresamente en el correspondiente tipo contrato, por lo que, en nuestro supuesto hay que referirse a las previstas para el contrato de servicios en el artículo 313 y, en concreto, a lo dispuesto en su apartado c):

“c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.”

El contrato que ahora nos ocupa tiene por objeto el “Control de calidad de las obras de 4 VPPA y trasteros en el municipio de Horcajo de la Sierra - Aoslos; 4 VPPA en el municipio de Puebla de la Sierra; y 10 VPPA, en



Berzosa de Lozoya” y, en este sentido, tiene carácter complementario en la medida que se trata de un trabajo necesario para la correcta realización de la prestación del contrato principal, es decir, de la mencionada obra.

Tal y como se ha adelantado en el antecedente de hecho cuarto, el contrato –principal- de obra fue resuelto con fecha 23 de diciembre de 2022 por resolución del Director Gerente con nº 5105/2022 (Expediente número A/OBR-021652/2020), por los motivos expuestos en dicha resolución.

En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado núm. 651/2007 establece que *“La expresión de la ley en este punto (‘en todo caso’) es tajante, y no admite discusión en cuanto a que, a partir del momento en que concurre esta causa, debe tramitarse el expediente de resolución del contrato, sin que sea relevante la voluntad del contratista. Esta disposición de la Ley de Contratos que es, además, lógica, porque carece de sentido continuar en el tiempo la prestación de un contrato accesorio cuando se ha resuelto el contrato principal dado que el contrato complementario deja de tener objeto desde el mismo momento en que no existe tarea a la que asistir técnicamente, fue expresamente introducida en la misma mediante la reforma de la Ley 53/1999, cuya finalidad era aumentar la transparencia y libre concurrencia en la contratación y evitar sobrecostos derivados de contratos de servicios de duración excesiva o de trámites procedimentales complicados. Por ello, se reformó también el apartado 2 del artículo 198 señalando la obligatoria desvinculación entre las empresas adjudicatarias de las empresas de consultoría y asistencia y las de los contratos de ejecución de obras e instalaciones sobre cuya vigilancia, supervisión, control y dirección recae la consultoría o asistencia técnica”*.

Quinto- Efectos de la resolución.

En cuanto a los efectos de la resolución de dicho contrato, el artículo 313.2 de la LCSP establece para este tipo de contratos que su resolución *“dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración”*.

Por su parte, el apartado 3º de dicho precepto establece que *“En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado primero del presente artículo, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido”*

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no se trata de una resolución total del lote 1 del contrato mencionado. Se trata, más bien, de una resolución parcial del mismo ya que dicho lote conlleva actuaciones en el municipio de Horcajo de la Sierra-Aoslos que el contrato principal de obras no contemplaba.

“En cuanto a la posibilidad de resolución parcial, ha de advertirse que, aunque la LCSP no contemplaba expresamente la resolución parcial de los contratos, es doctrina del Consejo de Estado (por todos, los Dictámenes 2416/2004, 2907/2004, 3252/2004 y 921/2006) que puede acordarse la resolución parcial de un contrato cuando éste tenga distintos objetos perfectamente diferenciados y ni la naturaleza del contrato ni la voluntad de las partes exijan el mantenimiento total, o en aquellos casos en que existan razones de interés público que justifiquen la conservación del negocio en lo realizable” (Dictamen 426/2016 del Consejo Consultivo de Castilla y León)

Sexto. - Órgano Competente

Tal y como establece el art. 190 de la LCSP: *“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de (...) acordar su resolución y determinar los efectos de esta.”*



Por todo lo expuesto, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por las disposiciones vigentes, y a la vista del resultado de las actuaciones realizadas, eleva a la Dirección Gerencia la siguiente

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

RESUELVO

PRIMERO. - Acordar la resolución parcial del lote 1 del contrato de servicios de “Control de calidad de las obras de 4 VPPA y trasteros en el municipio de Horcajo de la Sierra - Aoslos; 4 VPPA en el municipio de Puebla de la Sierra; y 10 VPPA, en Berzosa de Lozoya” (A/SER-033033/2019), adjudicado a INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U (NIF: A24036691), como consecuencia de la resolución del contrato principal del que es complementario, de conformidad con lo establecido en el artículo 313.1 apartado c) y 313.2 y 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.- Aprobar una liquidación a favor del contratista por un importe de 1.367,18 € IVA excluido (1.654,29 € IVA incluido) más 329,86 € en concepto del 3% de indemnización.

TERCERO. - Barrar el crédito remanente correspondiente a la parte resuelta en el documento de disposición del gasto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Eusebio González Castilla

